

Las cortes de Cádiz

Escribe: ABELARDO FORERO BENAVIDES

Esta es una página gloriosa e infecunda de la historia de España. La mayor parte de su territorio está ocupado por las tropas francesas. Se adelanta una guerrilla cruel en contra del usurpador. El rey Fernando continúa cautivo en Valancay. La resistencia tenaz y formidable ha roto todos los cálculos de Bonaparte. La simpatía del mundo acompaña a esos guerreros indomables, que como en los tiempos de Pelayo, se refugiaron en las rocas, en las selvas, en los recodos para defender su independencia.

Y dentro de estas condiciones dramáticas España decidió convocar sus estados generales, con el propósito de darle una constitución al reino y una evasión al sentimiento de reforma.

“Las cortes se hallaron en una situación completamente difícil —escribe Carlos Marx— acorraladas en un punto lejano de la Península, separadas durante dos años del resto de la monarquía por el ejército francés, representaban una España ideal, mientras la España viva se hallaba ya conquistada o seguía combatiendo. Durante la época de las cortes, España se dividía en dos partes. En la isla de León, ideas sin acciones, en el resto de España, acciones sin ideas”. Es una síntesis magistral.

A una isla batida por la tempestad, asolada por la peste, vigilada por los barcos enemigos, al último retazo de la Iberia náufraga, se dirigen penosamente los oradores de las cortes. La soberanía en cautiverio es asumida ahora por ese grupo de frailes y abogados, que llegan desde distintos sitios de la península en llamas.

La dignidad y el aire de grandeza que adquiere este cenáculo, lo otorgan dos circunstancias: la una, el peligro permanente en que se hallan las cortes, de ser aplastadas por la zarpa del corso y disueltas a cañonazos.

Y la segunda: la altura intelectual de las deliberaciones, condenadas de antemano a naufragar en el estruendo de la guerra y del mar.

Allí se oyeron exámenes prolijos de las instituciones españolas y de las reformas deseables, emisiones continuas de ideas audaces y sin eco. Ninguno de los protagonistas de este curioso parlamento, obtuvo prestigio

y fama sonora. Su esfuerzo puede considerarse como estéril. Y la utopía consagrada allí no fue defendida por ningún grupo de fanáticos, ni trascendió al pueblo, ni los anunciadores de la nueva era fueron aclamados.

España estaba obsesionada por expulsar a José y por asistir al regreso del deseado. No tenía una idea sino un sentimiento. Y en la isla de León, como lo dice Marx, había ideas, sin la comitiva de las acciones.

¿De dónde surgió la iniciativa de las cortes...?

Los representantes de Cuenca, Hualde y de León y el conde de Toreno, se presentaron ante la junta de Cádiz, portadores de un memorial firmado, por otros diez diputados en el que se insistía en la rápida convocación de las cortes:

“La convocación de las cortes, se hace señor, a cada instante más precisa”.

Y se afirmaba, en un estilo inusitado, por las afirmaciones que implicaba, un claro programa renovador:

“Una nación, que como la española ha estado por tantos siglos sumida en el abatimiento y la ignorancia, a merced de la arbitrariedad de un ministro, de un valido, de un rey débil o disipado, sin apoyo, sin constitución, sin libertad, sujeta y esclava, necesita de toda la energía, de toda la actividad, de la extensión de las buenas ideas, para que lleguen estas a formar un hábito que contrarreste y se oponga al que arraigó la servidumbre de tantos años. Esto tan solo se puede conseguir con interesar al pueblo, con hacerle ver que no solamente pelea por expeler al enemigo, sino para consolidar su felicidad futura, para asegurar a sus hijos tranquilidad y sosiego y gozar los que sobreviven, en medio de un gobierno justo, del fruto de su sangre y de sus sudores”.

“La exposición de los diputados se vio reforzada al día siguiente por otra de la junta de Cádiz, cuyo contenido constituye un claro avance”. “La junta espera que se convoquen las cortes, bajo las reglas ya dadas por las de marzo anterior, sin adición al reglamento del 1º de enero, adición que la nación miró con sentimiento, porque sin estamentos, toda ella alzó el grito de su libertad” (1).

Este fue el antecedente inmediato. Pero otras fueron sus causas remotas.

Existía desde finales del siglo XVIII, un grupo de intelectuales de inclinación liberal, que formulaban críticas a la monarquía absoluta y que aspiraban a una reforma. Habían madurado un criterio en contra del sistema, acusándolo en sus vacíos y vicios salientes. Eran enemigos de la Inquisición, que les parecía superada por los tiempos, astilla náufraga de una España que no existía y de una época de guerras religiosas que ya había sido superada. La palabra en boga era “la tolerancia”.

(1) *Memorias del tiempo de Fernando VII*. Página XVI. Tomo II.

Y en presencia del gobierno de Godoy se habían formulado la necesidad de cambiar el sistema de los "válidos", por el régimen de los ministros responsables.

Pensaban además que la opinión pública debía expresarse a través de un parlamento permanente y habían asimilado la tesis de Montesquieu, sobre la división de los tres poderes.

Algunos eran discípulos directos de Rousseau. Circulaban cartillas con el pensamiento del ginebrino. Una de ellas, anónima, llevaba el título, *Carta a don Juan de Madrid Dávila* y resumía la tesis sobre la soberanía popular:

"Yo llamo soberano a la colección de los pueblos reunidos entre sí bajo del pacto primitivo, en que estipularon sujetarse a la voluntad general y sin el cual la sociedad no podría existir. Llamo "leyes" a los actos de la voluntad general y el pueblo está sometido a ellas, porque es su autor. Pasemos a explicar la voz rey. Llamo con este nombre a aquella persona intermedia, establecida entre los súbditos y el soberano, esto es, entre los ciudadanos todos individualmente y los mismos tomados colectivamente. En él debe residir la potencia ejecutiva, que no es sino la fuerza aplicada a la ley. No es el señor del pueblo, sino un encargado de hacer ejecutar las leyes" (1).

La influencia de la enciclopedia y de la revolución sobre algunos sectores ilustrados de España fue evidente. Francia adquiría un liderato intelectual. Con la enciclopedia ganaba los espíritus. Con la revolución deslumbraba a los pueblos. Con el imperio, era la imagen misma del poder.

Y la necesidad del cambio, sin que existiera forzosamente una ideología previa, se hacía evidente en los abusos del régimen desplomado en Bayona. La soberanía del rey había sido cedida a un hombre sin prestigio moral y sin conocimientos y preparación de hombre de Estado. Al regreso de su cautiverio, Fernando VII debería encontrar bien definidas las estructuras del gobierno, el alcance de su mandato, los linderos de su poder, la asesoría de las cortes.

Un dramático contraste se establece con los estados generales. No hay pompa, ni desfile, ni palacio de Versalles, ni rey, ni multitudes anhelosas, ni ocasión a juramentos patéticos como el del "Juego de Pelota", ni está pendiente Europa de las palabras de los grandes oradores, ni existe el mundillo intelectual de los "salones", donde se habla de constitución y se declaman los discursos, antes de pronunciarlos en la asamblea.

El solo hecho de que llegaran a Cádiz, los diputados, constituía una odisea. Joaquín Lorenzo Villanueva, en su libro de memorias, *Mi viaje a las cortes*, en un estilo llano y sencillo nos cuenta, cómo fue difícil para él y para una veintena de diputados, embarcarse en Cartagena y obtener transporte hasta Cádiz. Durante varias semanas interminables, hicieron toda especie de gestiones, con los capitanes de los navíos ingleses, con las

(1) *Memorias de tiempos de Fernando VII*. Biblioteca de autores españoles. Tomo XCVIII, página 35.

autoridades de Cartagena, los comerciantes, los marineros, los médicos de la higiene. Seis páginas transcurren en la descripción minuciosa de estas solicitudes y quejas, sin que se advierta en nadie el menor interés de conducir a su destino a los futuros legisladores. Por fin lograron embarcarse en Alicante. En la travesía tuvieron muchos sustos. Veían pasar de cerca barcos corsarios. Había ausencia de provisiones. Doblaron el cabo de Palos:

“Esta mañana se divisó a corta distancia del navío, una cosa pequeña que parecía cabeza de un hombre. Se echó un bote para reconocerla y se halló ser una calabaza atada por una cuerda”.

Tres días después pasaron por el estrecho de Gibraltar. “A las cuatro de la tarde era ya el viento impetuosísimo, todavía hacíamos camino con él, con gran sobresalto”.

El día 23, “amanecimos a la vista de Cádiz”.

Y el 24: “arreglado el carruaje que nos había de conducir a la isla de León, salimos a las cuatro de la tarde y a vista de las balas y bombas de los sitiadores, y con riesgo de que nos tocara alguna de ellas, atravesamos el arrecife hasta la isla, a donde llegamos a las seis de la tarde”.

Y al día siguiente comenzaron las sesiones. El primer tema por tratar: la constitución del gobierno. La escogencia de los regentes. La votación favoreció: al general Joaquín Blake, el capitán de fragata Pedro Agar, el jefe de escuadra, Gabriel Císcar.

El canónigo Villanueva, era católico convencido con inclinaciones liberales. Desde la segunda sesión decidió hablar:

“Antes de la primera votación, viendo yo que nadie hablaba de invocar para ella, la asistencia del Espíritu Santo, dije estas palabras: Señor, vamos a tratar de un negocio que por ventura es el más grave de la nación y el que tiene mayor influencia en su libertad y felicidad. Somos católicos y debemos dar muestras de ello. Antes de proceder a la elección invoquemos brevemente el Espíritu Santo, rezando el himno *Veni Creator* con su versículo y oración. Levantáronse muchos a un tiempo, apoyando mi propuesta y fue aprobada por aclamación” (1).

“En la isla estaban reunidos, noventa y siete eclesiásticos, ocho títulos del reino, treinta y siete militares, dieciséis catedráticos, sesenta abogados, cincuenta y cinco funcionarios públicos, quince propietarios, nueve marinos, cinco comerciantes, cuatro escritores y dos médicos”.

En total trescientos cinco diputados. Pero no estaban divididos por estamentos, como en Versalles: Nobleza, clero, estado llano. Trescientos de la nobleza, trescientos del clero, seiscientos del estado llano.

A lo largo de las deliberaciones fueron avanzando lentamente en el estudio de los temas, sin urgencia ni salidas dramáticas. Una isla recoleta, en la que se refugiaba el pensamiento, mientras la nación desesperada luchaba por la vida.

(1) *Memorias de tiempos de Fernando VII*. Villanueva. Mi viaje a las cortes. Página 15.

Es curioso establecer el contraste entre las cortes y los estados generales.

En primer término, las discusiones de grande interés histórico y las fórmulas a que llegaron, no tuvieron ningún poder de irradiación. Lo que se acordó allí, en buena parte era ignorado por los españoles. En veces se da la sensación de estar asistiendo a la deliberación de una academia de ciencias políticas.

El pueblo no tuvo participación directa en la elección de los diputados, que hablaban a nombre de la nación. No se formó un partido, que sirviera de motor a la revolución, como el Jacobino y que se encargara de mantener vivos los vínculos candentes entre los delegados y la opinión popular.

Los diputados no se fraccionaron, abiertamente, entre derecha e izquierda, llanura y montaña. Presentado un tema concreto, se discutía sobre él y se daban opiniones. Pero con frecuencia se dio el caso de que quienes aparecían como liberales al hablar de las colonias de ultramar, sostenían principios conservadores al discutirse el tema de la Inquisición.

Esta inexistencia de cofradías políticas, permitió dentro de las cortes el predominio de una "minoría ilustrada", a la que se deben en gran parte los resultados obtenidos y la orientación de la carta.

"Las cortes de Cádiz pretendieron hacer —escribe Enrique Tierno Galbán— la revolución francesa en España, sin salir de los límites de la asamblea nacional francesa. En otras palabras quisieron hacer la revolución sin el pueblo. Y hay razones suficientes para admitir, que en gran parte ocurrió así y no de otro modo. Que pueda haber o no una revolución sin intervención del pueblo, en el sentido global del proletariado, está en estrecha relación con el concepto pseudo-utopía que hemos expuesto antes. Los diputados de Cádiz no eran gentes del pueblo, ni propiamente hablando representaban al pueblo. Quizá mejor a la "nación", palabra que repiten bastante y definieron en la constitución. La nación admite una representación en cierto sentido teatral; se puede representar a la nación desde una idea, o arrogándose unas cualidades, pero representación popular, en el sentido jurídico-parlamentario, no lo hubo apenas en Cádiz. En las propias cortes se reconoció en varias ocasiones la precariedad de los títulos jurídicos de los diputados que representaban a provincias levantadas en armas, o bien ocupadas por el enemigo. Sin embargo, la nación estaba representada. Los dos conceptos de representación política que hasta J. S. Mill han estado conviviendo en desarmonía, el concepto de representación de la nación y el concepto de representación del pueblo, están patentes en las cortes de Cádiz. Al pueblo, en el orden jurídico-político de la expresión representación, no lo representaba ningún diputado, y a la nación, en el sentido romántico del término, todos" (1).

Se observa en las cortes la ausencia de una clase noble, celosa defensora de sus privilegios. Tan solo concurrieron ocho títulos del reino. Esto se explica en gran parte por el fraccionamiento suscitado por el gobierno del rey José, quien incorporó a su comitiva, a muchos de los cortesanos de Fernando. No existe entre los nobles un foco de resistencia,

(1) *Actas de las cortes de Cádiz*. Tomo I. Página 10.

a las nuevas ideas. En cambio la representación del clero era copiosa y dio su batalla sobre el tema de la Inquisición. Pero dentro del clero existía una corriente liberal minoritaria, que se encargaba de suavizar las asperezas y a ella pertenecía entre otros, Joaquín Lorenzo Villanueva.

Había un vacío, el del trono. Eso le quitaba impulso a cualquier movimiento revolucionario, porque no tenía contra quien dirigirse. Fernando era el símbolo lejano de la resistencia. Y el empeño español no era quitarle la corona, sino volvérsela a poner.

En líneas generales el cuadro es comprensible y los resultados políticos, previo este análisis, aparecen lógicos. Como no existía presencia popular, ni las ideas expresadas hacían parte del catecismo de un partido fanático, al abandonar a Cádiz los constituyentes encontraron otro vacío, la ignorancia del pueblo respecto a la reforma. La mentalidad popular no se había cambiado, en relación con el rey, durante la guerra. El único fanatismo que existía era el fanatismo de la corona. Por esa razón el absolutismo, al combatir el espíritu de Cádiz, no encontró una resistencia nacional. Las reformas podían estar orientadas dentro de un amplio espíritu, conveniente al pueblo, pero este no las había adoptado, ni exigido, ni conocido. Sintetizaban ellas unas ideas coherentes, que en la realidad eran sostenidas y defendidas tan solo por la minoría ilustrada.

Cuando se abrió la lucha entre los defensores de la constitución y los defensores del absolutismo, los primeros quedaron en minoría. No se habían incorporado esas reformas en la imaginación, en la sustancia y en la sangre del pueblo. Eran ajenas, superpuestas, artificiales. Y por esa razón necesitaron un siglo para abrirse camino.

“La Iglesia católica era menos culta que la francesa”, la nobleza menos fuerte y ensimismada, la opinión pública casi inexistente, los partidos políticos en la mente de Dios. El trono vacío, la guerra contra el francés ocupaba toda la capacidad emocional del pueblo. Al margen de esos hechos se entró a discutir cada uno de los capítulos y la “minoría ilustrada” logró un completo predominio en esas deliberaciones y obtuvo sin dolor y sin dramatismo la aprobación de las reformas.

Para complementar el cuadro, todos los días caían en las calles de Cádiz numerosas víctimas de la peste y se escuchaba monótonamente el estampido de la artillería. El interés para el historiador está fincado, en el sombrío contexto y en el contraste entre las urgencias vitales de la nación casi extinguida y la lucidez de palabra y pensamiento de una media docena de juristas.

A lo largo de los discursos se advierten dos sentimientos, el odio contra Bonaparte y el desprecio hacia Godoy. Y es curioso pensar, que mientras el monstruoso fantasma del corso presidía esas deliberaciones, otro espíritu, menos espeluznante, hacía sentir su presencia en el recinto, refugiado de contrabando en la isla de León, el espíritu de Juan Jacobo. Nadie habló de él, nadie osó citarlo. Algunas de sus ideas eran presentadas con el respaldo de los padres de la Iglesia, o con los antecedentes de la historia española, muy conocidos por los juristas.

El primer tema, la constitución.

“La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”.

“La soberanía reside esencialmente en la nación. Le pertenece por tanto exclusivamente establecer sus leyes fundamentales”.

Ahí se hallaba, discretamente, Juan Jacobo de consueta.

“La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios”.

Estos tres artículos están cargados de sentido.

La nación no es patrimonio de ninguna familia y por consiguiente no puede cederse ni endosarse a ninguna dinastía extranjera. La experiencia de Bayona inspira este aparte.

La soberanía reside en la nación. El rey deja de ser el soberano, y se adopta el principio de la convención francesa. Los autores del texto han leído *Los derechos del hombre*, cuyo artículo tercero dice: “el principio de toda soberanía, reside esencialmente en la nación”.

Y la nación está integrada por todos los españoles de los dos hemisferios. Este artículo se desarrolla después, al hablar de las provincias de ultramar: “La representación nacional de las provincias, ciudades, villas y lugares de la tierra firme de América, sus islas y las Filipinas, por lo respectivo a sus naturales y originarios de ambos hemisferios, así españoles como indios, y los hijos de ambas clases, debe ser y será la misma en el orden y forma, que tienen hoy y tengan en lo sucesivo las provincias, villas y lugares de la península e islas de España europea entre sus legítimos naturales”.

Cuando se inicia la discusión, se prepara el ánimo del lector de las actas de las cortes, a un debate ardiente y polémico. Y se encuentra con que uno de los primeros oradores, don Simón López, se pone de pie para decir:

“No tengo nada que añadir. Es conveniente que hagamos una protesta más solemne de nuestra fe, es necesario que se haga la de la encarnación del hijo de Dios, como que de ahí nace la religión católica, apostólica y romana. Esta declaración es tanto más necesaria, puesto que estamos en un tiempo en que reina mucho la herejía de la filosofía”.

* * *

Se descubre en este discurso un rasgo muy peculiar de las cortes. No se presentan en ella las ideas audaces y novedosas, bajo un aspecto beligerante, sino como si ellas hicieran parte de la tradición política de España. Y en consecuencia no chocaban pugnazmente con la mentalidad conservadora. Carecían de púas y agresividad y eran defendidas por gentes liberales-conservadoras, que ocultaban su liberalismo para no hacerse sospechosos y ocultaban su conservatismo para no aparecer como retardatarios.

Algunos, no todos, se dieron cuenta del alcance de estos artículos. Y dieron sus razones. El primero en expresarlas fue el señor Borrull:

...“Se ha obligado a todos los diputados a que juren conservar a nuestro muy amado soberano señor don Fernando VII todos sus dominios. Y así, a reconocerle por soberano y a entender esta palabra en sentido propio, por ser ajeno de su voluntad y justificación, como también de la solemnidad del acto lo contrario. Mas ahora se propone en este artículo, que la soberanía reside esencialmente en la nación. Pero si reside esencialmente en la nación no puede separarse de ella, ni el todo ni parte de la misma. Y por consiguiente no puede competir parte alguna al señor don Fernando VII. Con todo vuestra majestad (alude a las cortes como un personaje simbólico al cual se le da el tratamiento de rey) ha mandado reconocerlo como soberano, luego según la declaración de vuestra majestad (las cortes), el rey Fernando tiene parte de la soberanía. Luego la soberanía ha podido separarse, y por lo mismo no puede decirse que reside esencialmente en la nación. Y así no hallo arbitrio para aprobar el referido artículo tercero en los términos en que está concebido” (1).

La tesis ortodoxa la expuso el obispo de Calahorra. Citó a los padres de la Iglesia. A San Irineo, quien dijo: “Los reyes deben su dignidad al mismo que deben su vida”. A Tertuliano, quien así hablaba del emperador: “Así como de solo Dios recibió el alma, así de El solo recibió el imperio”. A San Juan Crisóstomo y a Santo Tomás, quienes establecieron dos principios; el uno que el hombre como animal sociable apetece vivir en comunidad y el otro, que en una comunidad perfecta es necesario un poder a quien pertenezca el gobierno de ella misma, porque el pueblo, según la sentencia del sabio en los proverbios, quedaría destruído faltando quien gobernase.

El pueblo español trasladó siempre al rey toda la soberanía. Pero le puso un freno con las leyes fundamentales que juraba. No podía partir ni enajenar los bienes pertenecientes a la corona.

Y el noble obispo terminaba con una elocuente invocación:

“Pregúntese a todas las provincias y pueblos de España, a las Américas y dominios ultramarinos, si han jurado y reconocen por su rey al señor don Fernando VII, y unánimemente responderán que sí, desde el grande hasta el menor artesano, desde los obispos hasta el más pobre sacristán, desde el general hasta el más infeliz soldado...”.

“A Fernando VII corresponde ser monarca soberano de las Españas, el solo imaginar la menor novedad en este punto esencial de nuestra constitución me hace estremecer”.

Contra ellos se levantó la voz del conde de Toreno, cuya argumentación se dirigió a demostrar: si la soberanía reside solamente en el rey, debemos someternos a los decretos de Bayona, a las órdenes de la junta suprema de Madrid, a las circulares del consejo de Castilla. Y todas esas resoluciones las desechó la nación, al asumir, en ausencia del rey la soberanía.

(1) *Actas de las cortes de Cádiz*. Tomo II. Página 559.

Fue más enfático y elocuente el diputado gallego:

“Si la nación no es esencialmente la soberana, ¿en qué derecho se fundan tantos hechos que lo acreditan en nuestras historias...? ¿Con qué facultades se ha puesto el cetro de España en otras manos que las que el orden establecido requería...? ¿Con qué facultades se despojó públicamente en Avila de las insignias reales a Enrique IV...? ¿Con qué facultades resistieron los aragoneses a viva fuerza las órdenes de Felipe II? Pues aunque el poder de este monarca los atropelló y esclavizó, no hay quien tache de ilegal la resistencia que le hicieron. ¿Con qué facultades admitían o desechaban los navarros las reales disposiciones hasta el presente tiempo, cuando juzgaban que eran opuestas a la utilidad del reino...? Y finalmente, ¿con qué facultades y con qué objeto, estamos sancionando leyes y discutiendo una constitución, si ha de estar en manos del rey destruirla con un decreto al momento que llegue...? Todo esto es ilegítimo y nulo, si no es esencialmente soberana la nación que representamos... Permítasenos suponer por un momento que el rey Fernando, en país libre de la influencia de su opresor, por ejemplo, Inglaterra, hiciese de nuevo la renuncia de sus derechos en el emperador de los franceses. ¿Creen las cortes que por esta cesión se entregarían los españoles al yugo de un hombre que detestan...?” (1).

Al proceder a la votación nominal, fue aprobado el artículo por ciento veintiocho votos contra veinticuatro. Había triunfado la minoría ilustrada. ¿Por cuánto tiempo...? Ella no lo sabía.

* * *

El día 9 de enero de 1811, se inició en las cortes de Cádiz el debate sobre las provincias de ultramar y entró a discutirse la proposición que establecía la igualdad de representación de América y de España. Ya había quedado consagrado el principio de que la nación se define, como la reunión de los españoles de los dos hemisferios.

Para la mejor comprensión de este debate, hay necesidad de hacer un rápido esbozo de las relaciones entre los distintos gobiernos de España a partir de 1808 y los virreinos y capitanías generales de América. El proceso de estas relaciones es confuso y caótico. La mayor parte de las gestiones adelantadas por los precarios gobernantes de España no tienen resultados ni efectos. Todo ello se explica por el avance de las tropas napoleónicas, que todos los días reducen el territorio dominado por los resistentes y los obligan a replegarse a Sevilla, a Cádiz, a la isla de León. En circunstancias tan apremiantes el gobierno de las juntas y de las regencias, volvía con desesperación discontinuada su vista hacia las provincias de América, en busca de un apoyo moral y económico que jamás fue prestado. A medida que avanzaban los ejércitos de Bonaparte, avanzaba en América el espíritu de la independencia. Eran dos procesos simultáneos. La ocupación de España por las tropas del rey José, y la evacuación en América de la autoridad provisional.

(1) *Actas de las cortes de Cádiz*. Página 577.

El primer comisionado de la junta de Sevilla, que llegó hasta estas tierras a informar sobre los acontecimientos de España, a partir de Bayona, fue el capitán de fragata don Juan José de Llorente, quien llegó a Cartagena en el mes de agosto de 1808. Parece que no era un hombre prudente y flexible y que su presentación en Santa Fe produjo la peor impresión. "Se presentó con un orgullo insensato y afectando la superioridad de un amo entre sus esclavos" (1).

El virrey Amar y Borbón promovió una reunión solemne para oír al enfático capitán de fragata. En esa reunión se leyó un mensaje informativo de la junta de Sevilla. Los objetivos concretos que se perseguían eran: la declaración de guerra del virreinato y de toda América, en contra de Napoleón, siguiendo el ejemplo de la junta. Los españoles y los criollos debían sumarse al esfuerzo militar de la península y secundar los esfuerzos en contra del invasor.

Debía procederse a la proclamación del rey Fernando VII, a cuyo nombre se adelantaba la resistencia, con la presunción de que sus mensajes de Bayona, cediendo la corona, habían sido inicuamente determinados por la fuerza y la amenaza.

Y lo principal: "que se enviaran a la junta de Sevilla, todos los caudales de la Real Audiencia que hubiera disponibles". La autoridad precaria de la junta quedó reconocida.

Era el momento de actuar y ese momento se le escapó al virrey Amar y a sus consejeros. Contra el francés existía un vivo sentimiento de odio y resistencia, no tan hirviente como el que se expresó en Caracas. Pero ese sentimiento habría podido estimularse con una acción intensa de propaganda. Bastaba poner en evidencia, los horrores de la revolución francesa, su ateísmo, la inmolación de su rey, su lucha contra la religión católica, la palabra del Papa. Había sido fácil organizar una cruzada.

Y un político avizor habría podido, al declarar la guerra, poner en movimiento el virreinato, enrolar voluntarios, organizar unos cuantos batallones, solicitar ayuda económica, encender la sangre del pueblo con el compromiso romántico de rescatar al rey y combatir a su victimario. Nada de eso se hizo y a la reunión promovida por el virrey acudieron solamente unos pocos "notables", que aprobaron la junta de Sevilla y volvieron a la plácida normalidad colonial. Lanzar a América, en ayuda y socorro de España, habría sido la manera de encausar su energía y asociarla a una empresa gloriosa.

Los informes cayeron en el pesado pozo de la indolencia y el inmovilismo. Los santaferreños se dedicaron a susurrar. El virrey y sus oidores no saltaron la rutina de sus actividades ordinarias, continuaron siendo funcionarios parsimoniosos, en los momentos en que habría podido encenderse la opinión de los pueblos con una cruzada.

(1) José Manuel Restrepo. *Historia de la revolución*. Tomo I. Página 63.

La junta de Sevilla dio un segundo paso. Consideró conveniente asociar a los americanos al gobierno de la península. Se invitó a los americanos para que se hiciesen representar en esa junta.

“Los dominios españoles de América —dice el decreto de invitación— no son coloniales, sino parte esencial e integrante de la monarquía. Así que deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos que unen a unos y otros dominios, correspondiendo a la heroica lealtad y patriotismo que acaban de manifestar las Américas, declara que deben tener parte en la representación nacional y enviar diputados a la junta central”. Se está hablando desde España otro lenguaje. El virreinato puede elegir voceros suyos en Sevilla, para colaborar en las decisiones del gobierno y secundar a los españoles en su lucha contra el usurpador.

El decreto dispone, que cada uno de los virreinos y capitanías generales independientes, nombre un diputado para la junta. ¿Cómo...? se preguntan los granadinos de la “minoría” ilustrada. ¿Tan solo un diputado...? Esa representación es deficiente e injusta. Si se declara la igualdad de las provincias españolas y americanas, es apenas lógico que se establezca la igualdad de la representación.

Es el momento en que el cabildo de Santa Fe comisiona a don Camilo Torres para que inscriba su representación a la suprema junta central de España.

Gozaba don Camilo de un justísimo prestigio de jurista y de hombre ilustrado. Su severa y hosca figura, era familiar en los claustros de Nuestra Señora del Rosario, en los que explicaba filosofía. El cabildo de Santa Fe, ante las noticias de España y con el presentimiento de lo que podría pasar con el hundimiento de los Borbones, lo nombró su asesor, requirió sus luces. Don Camilo al aceptar la comisión, no quiso reducirla a un marco precario. Estudió el conjunto del tema: las relaciones de España y las colonias de América. Clasificó los errores, omisiones y vacíos de la administración española. Entró a estudiar las condiciones dentro de las cuales América y España podrían mantener felizmente sus vínculos. Y entró a dar respuesta a la invitación formulada por la junta de Sevilla:

“América y España, son dos partes integrantes y constituyentes de la monarquía española, y bajo este principio y el de sus mutuos y comunes intereses, jamás podrá haber un amor sincero y fraterno, sino sobre la reciprocidad e igualdad de derechos. Cualquiera que piense de otro modo no ama a su patria, ni desea íntima y sinceramente su bien. Por lo mismo excluir a las Américas de esta representación, sería, a más de hacerles la más alta injusticia, engendrar sus desconfianzas y sus celos y enajenar para siempre sus ánimos de esta unión”.

No considera que la representación ofrecida al virreinato corresponda a este principio. Las provincias de España han enviado dos vocales a la junta. En cambio a los virreinos y capitanías generales se les señala tan solo un diputado. ¿Por qué esta diferencia y esta injusticia...? ¿Por qué se les coloca en un pie de desigualdad...? ¿Acaso no se dice que todas ellas son parte integrante de la monarquía...?

“La razón única y decisiva de esta igualdad es la calidad de provincias, tan independientes unas de otras y tan considerables, cuando se trata de representación nacional, como cualquiera de las más dilatadas, ricas y florecientes” (1).

Igualdad de las provincias. Igualdad de los hombres que en ellas habitan:

“Tan españoles somos como los descendientes de don Pelayo, y tan acreedores, por esta razón, a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los que salidos de las montañas expelieron a los moros y poblaron sucesivamente la península. Con esta diferencia, si hay alguna, que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de increíbles trabajos y fatigas, descubrieron y poblaron para España este nuevo mundo”.

Si la junta central, en ese minuto propicio de la historia, hubiera llevado a la práctica, con medidas concretas, como la igualdad de la representación, el espíritu de la invitación, la historia habría tomado otro rumbo. Porque lo que los granadinos y venezolanos y mexicanos querían, no era nada distinto a la igualdad de sus reinos con el de España, de sus provincias con las viejas comarcas que unificaron los reyes católicos y la igualdad de los americanos con los europeos. Más precisamente la igualdad entre criollos y españoles, aunque subsistiera la diferencia con los pardos y los negros.

Pero aún en el naufragio se mantuvo la modorra de la burocracia y su inagotable imaginación para convertir las cosas obvias en complejas. El sistema adoptado para elegir el diputado de la Nueva Granada, uno solo, era inverosímilmente lento y complicado.

En cada capital de cada una de las provincias del virreinato, se debe reunir el ayuntamiento. Y este procederá a la elección de tres individuos. Los tres nombres escogidos, se someterán a la suerte, para sacar uno.

De acuerdo con este sistema, el cabildo de Bogotá eligió a don Luis Eduardo de Azuola, porque la suerte no favoreció a don Camilo Torres, incluido en la terna. En Pamplona la suerte favoreció a don Pedro Groot. En Popayán, don Antonio de Narváez. En Cartagena don J. M. García de Toledo.

Habiendo recibido la comunicación de estos nombres, se verificó la escena final en Santa Fe. Estaban presentes el virrey, la audiencia, los miembros del cabildo. En presencia de tan distinguido auditorio, se eligieron preliminarmente tres nombres: el conde Puñonrostro, Azuola y el general de Narváez. Entre esos tres nombres, hay que sacar uno a la suerte. El sorteo favoreció al general de Narváez, natural de Cartagena. La suerte no tenía intuición política. No era el hombre para las circunstancias.

Como acontece con frecuencia entre nosotros, ni el general de Narváez llevó la voz de las reivindicaciones americanas en Sevilla, ni el *Memorial de agravios* escrito por don Camilo, fue enviado a la junta central. Circuló

(1) Camilo Torres. *Memorial de agravios*. Edición facsimilar. Pág. 9.

en pliegos clandestinos, porque el honorable cabildo sintió algunos temores de enviar a su nombre, una explicación tan lúcida de las aspiraciones del virreinato. "El cabildo se intimidó cuando le fue presentado el proyecto y decidió archivarlo". Se había perdido otra oportunidad.

* * *

En el año 1810 fueron convocadas las cortes, que ya hemos visto actuar en la isla de León. Partió de Cádiz una nueva invitación, para que los americanos hicieran parte de ese parlamento de los españoles de ambos mundos. Este mensaje corrobora el criterio del *Memorial de agravios*. En una sola frase se escribe la condenación de los gobiernos de España y del tratamiento dado a las provincias:

"Desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. No sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro, mientras más distantes estabais del centro del poder. Mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruídos por la ignorancia. Tened presente que al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el congreso nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores: están en vuestras manos".

Si estas frases hubieran sido escritas por un americano, se hubieran considerado subversivas. Constituía un aliciente poderoso el oírlas desde ultramar: "Vuestro destino ya no depende de los virreyes". Fueron escritas precisamente en el año 1810, cuando en todas las comarcas de España se puso a la obra la consigna: "Afuera los virreyes". Criollos y españoles estaban de acuerdo. Definitivamente la junta central estaba haciendo demagogia.

Cartagena eligió en junio de 1810, sus diputados a las cortes, a José María García de Toledo, Antonio José de Ayes y Manuel Benito Revollo. Don Domingo Caicedo figura como suplente, por Santa Fe.

Pero se aproxima la revolución de julio. La historia aparece con un nuevo rostro. El virrey Amar y Borbón es desconocido e injuriado en Santa Fe. El nuevo epicentro de la autoridad es el cabildo. Las multitudes de Carbonell, se han excitado con la libertad. Ya no es posible buscar las soluciones de la crisis política con los criterios habituales. El gran abismo entre España y América comienza a abrirse. Ante esa tierra cuarteada, se necesitan políticos de genio, para evitar que las Américas se divorcien de manera definitiva. En el mes de septiembre se instalan las cortes, bajo el fuego de los cañones, asediadas por la peste. En la isla de León se enciende una llama: el pensamiento liberal.

Situación dramática la de España. Su rey en Valancay. Su capital ocupada por las tropas del rey José. Su nobleza dividida entre afrancesados y resistentes. Sus decididos aliados en España, los ingleses, que luchan cuerpo a cuerpo contra las armas de Ney, en las islas del Caribe se muestran menos animosos y entran a simpatizar con todos los movi-

mientos que arruinen a España. Derrotar a Napoleón en Europa y apoderarse del comercio en las Indias españolas, es el doble objetivo de la política inglesa.

Y mientras el territorio sobre el cual ejerce su gobierno la regencia, es todos los días más estrecho, se abre el congreso en la isla de León y dentro de él predomina la minoría ilustrada. A esta le preocupa mucho menos la guerra presente, que las instituciones futuras. Cuando salga Fernando VII de su cautiverio, debe encontrar, simétrico y bien definido, el nuevo edificio de la constitución.

Y cuando la junta abre los brazos, para convocar a los americanos, llamándolos por primera vez hombres libres y les dice que son ellos los encargados de forjar su propio destino, se inicia precisamente el proceso del desmoronamiento del imperio. Una rara coincidencia de la historia: la primera vez que se habló, ya no el lenguaje de la autoridad, sino el lenguaje de la igualdad y la libertad, a nombre de España, la respuesta fue el rompimiento súbito de los primeros vínculos, en Quito, en Santa Fe, en Caracas. Cuando el pensamiento liberal se encendía en Cádiz y se invitaba a los americanos como nuevos socios del gran imperio en naufragio, se inició la revuelta.

Ese mes de julio no se produjo contra los sistemas de Felipe II y de sus sucesores, ni contra Carlos IV y Godoy en apogeo, sino en el preciso instante histórico en que se extiende la invitación, declarando a los americanos dueños de sus destinos. La luz liberal de Cádiz, preside absurdamente la liquidación del imperio. Enseñanza extraña de la historia. La respuesta a Cádiz, fue el 20 de julio.

Ojeamos curiosamente el diario de las cortes, escrito por Joaquín Lorenzo Villanueva, en busca de los ecos lejanos de la subversión americana. ¿Cómo llegaban las noticias a Cádiz, sobre Cartagena, Caracas, la Nueva España...?

Nos interesa la visión, el punto de vista de los españoles sobre los acontecimientos de América. Dos meses empleaban las noticias para llegar a su destino. Y con frecuencia, después de la travesía, llegaban fragmentarias, inconocibles, alarmantes. Pero no hallamos en el diario de Villanueva, eco de esa alarma. Fríamente las registra, sin comentarios:

“Día 24. Se leyó un informe de la regencia sobre los motines del Nuevo Reino de Granada y de Quito y la creación de juntas en Cartagena, Santa Fe y otras ciudades de aquel continente, donde se refieren las muertes desastradas y otros atentados con que se ha agravado aquel levantamiento, pidiendo a las cortes que dicten medios para atajar estos males tan terribles en sí y en sus consecuencias. El señor Pelegrín dijo que siendo esto urgentísimo, juzgaba debía nombrarse una comisión especial que proponga al congreso las medidas oportunas”.

“Día 10. Se acordaron las proposiciones relativas a las juntas de América. La primera determina que con las juntas que no reconocen a nuestro gobierno, que son las de Caracas, Buenos Aires y Santa Fe de

Bogotá, no promueva comunicación la regencia, para que este paso, que sería de conciliación, no sea atribuido por ellas a debilidad, quedando el gobierno pronto a escuchar las proposiciones que ellas quieran hacerles”.

“Día 23. Se leyó una exposición firmada por casi todos los vocales americanos, en que proponiéndose indagar las raíces de la insurrección de las provincias sublevadas de aquellos dominios, dicen que su origen es el descontento inveterado con la dureza de algunos gobernadores y otros jefes que van de la península, y que el remedio no consiste tanto en la fuerza armada que pueda enviarse allá como en la mejora del gobierno”.

Día 21 de enero de 1812. Se procedió a la elección de los regentes:

“Salió electo el duque del infantado por 89 votos. El general Villavicencio por 87 votos. El general Conde de Labisbal, por 104 votos.

Para primer regente americano salió don Joaquín Mosquera y Figueroa. Fue esta elección desagradable a la mayor parte de los diputados de América, que estaban por Bodega y León, y también para el señor Borrul y su partido, que los ayudaban...” (1).

Don Joaquín Mosquera y Figueroa. Lo hemos encontrado en Santa Fe, en el año 1794, adelantando con todo rigor el proceso en contra de don Antonio Nariño. Lo volvimos a hallar en Caracas, en 1808, enviando a la prisión a los amigos de Bolívar, que propusieron la creación de una junta en la que tuvieran representación los americanos. Lo volvemos a encontrar en 1812, en Cádiz, elegido como regente en representación de los americanos. Ningún nombramiento más contrario al espíritu de las cortes, a la transacción con los revolucionarios, a la posibilidad de un entendimiento con los criollos sublevados. Mosquera y Figueroa constituía un reto a los santaferños y caraqueños, que lo habían visto actuar con mano implacable, asesorando al virrey Ezpeleta y al capitán general Casas... ¿Representar a los americanos...? Algo casi tan absurdo, como si Godoy representara a los españoles sublevados. Contra el estilo de funcionarios inexorables, como el señor Mosquera, se dirigían precisamente las quejas de la subversión. Nadie menos indicado para la nueva etapa, tan corta, de la constitución de Cádiz.

En las *Actas de las cortes de Cádiz* hay un capítulo especial, consagrado al tema de las provincias de ultramar. Se entró a discutir la proposición, que establece la igualdad entre las provincias de América y las de España. No hay lugar a un debate vehemente. La mayor parte de los diputados están de acuerdo. Y los opositores permanecen discretamente al margen de la discusión. Se oyen algunas voces americanas.

Esa igualdad de representación es la fórmula salvadora de la crisis. Lo dice el señor Guridi Alcocer:

“El fuego que se ha encendido en aquellas vastas regiones y que a la manera de un torrente va abrasando provincias enteras, no puede apagarse sino del modo que se expresa en las proposiciones. Las Américas

(1) Villanueva. *Mi viaje a las cortes*. Biblioteca de autores españoles. Tomo XCVIII. Páginas 136, 181, 265.

van a perderse y este es el único medio de atajar ese grave mal. Y cuando un árbol enferma y no se le corta poco a poco, a veces es necesario cortarlo de raíz. ¿Y cuál es la causa de que haya desaparecido en América la tranquilidad? No es otra que las quejas de sus habitantes, quejas presentadas en globo en las sobredichas proposiciones...”.

Y reiterando, sin saberlo, el pensamiento de Camilo Torres:

“Igualdad en los puestos para que se premie a los que los merezcan, sin que les sean antepuestos otros, solo por ser europeos” (1).

El diputado Argüelles es la primera figura intelectual de la minoría ilustrada. El y García Herreros, a medida que avanza el debate, se destacan como los líderes de la reforma, los más elocuentes, informados y asombrosamente activos.

Argüelles tiene una convicción: “La integridad de la monarquía española se obtiene por el único medio que existe: una constitución liberal”.

“Es preciso que las Américas gocen de absoluta igualdad de derechos... Yo siempre seré el abogado de la humanidad y de la causa de América. La miraré no solo como la tabla del naufragio para la libertad española... reclama contra tres siglos de desgracias, tres siglos de despotismo, tres siglos de sistemática opresión”.

El diputado Morales y Suárez, dibujó nítidamente el dilema ante el cual se halla España:

“Dos son únicamente las soluciones que puede elegir el Estado en este caso, una de armas y otra de letras. La fuerza de las bayonetas y la magia de la persuasión.

“La primera pide tres cosas: abundancia de soldados que remitir, abundancia de buques que equipar y abundancia de dinero para auxiliar la empresa. No veo que la metrópoli, entre los conflictos y contrastes que le causa el malvado de la tierra, logre estas abundancias, mucho menos de pronto, según convenía, para evitar el contagio. Apelar por este aparato militar, a las otras provincias intermedias y fieles de la América, es acaso buscar un remedio peor que el mal; es desterrar de aquellos países, la tranquilidad, la comunicación y el comercio; propagar el incendio a todos los lugares, esparcir los furores de una guerra civil y en una palabra arruinar el todo por la parte. Deberá preferirse pues la otra medida, que demanda también otras tres calidades: personas idóneas para persuadir, personas entusiasmadas o interesadas en verificarlo, personas habilitadas con los modos o arbitrios oportunos para el logro” (2).

El gran principio salió a flote: “Todos los naturales y originarios de América, tienen igualdad de derechos con los naturales y originarios de la España europea”.

Pero ese principio solo, desnudo, generoso y escueto, no tenía la virtud de producir hechos de vida. Argüelles y sus colegas pensaban que basta la

(1) *Actas de Cádiz*. Tomo I. Página 97.

(2) *Actas de las cortes de Cádiz*. Tomo I. Página 117.

enunciación de una idea, para que la idea triunfe y se incorpore a la realidad. Y esa idea necesitaba de hombres y de métodos de persuasión para hacerla fecunda.

Las cortes de Cádiz no lograron un éxito en la enunciación de su política, por varias razones:

No se apresuraron a comunicar a las colonias, ya convulsionadas, que enviaran cuanto antes sus diputados, en condiciones de igualdad con las provincias españolas. El principio adoptado, regía dentro de la constitución, pero no se autorizó que entrara en vigencia, desde ya, cuando era operante.

La medida en consecuencia no influyó sobre el estado de ánimo en América, a mediados de 1812.

Y se cometió el error de designar como regente americano, el personaje más odiado entre los criollos, don Joaquín Mosquera. Con ese nombramiento aparecía el generoso principio convertido en una irrisión. Y era tan importante el hombre como el principio. En este caso, el hombre derogaba por sí solo, con su inflexibilidad, el principio.

Los agentes de España en América, se hallaban a distancias de siglos con la España liberal expresada en Cádiz. Lo que tenían a la vista venezolanos y granadinos, era la presencia amenazante de Monteverde y Boves, Montalvo y Sámano. Ninguno de ellos estaba influído y empapado en el espíritu de Cádiz. Las herramientas humanas de la España liberal, en su tarea de la reconquista por la persuasión, eran peores aún que las de la España absolutista. Y el cambio de espíritu en Cádiz, no correspondía al cambio de funcionarios. En noviembre de 1812, Bolívar llegó a Cartagena. Era el mensajero de la América nueva, liberal y revolucionaria.